

Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario - CONADIH	Propuesta Legislativa: Ley que regula el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en Zonas no Declaradas en Estado de Emergencia dentro del Territorio Nacional Versión aprobada en Sesión del Pleno de la CONADIH el 16 de marzo de 2010.
---	---

ANTEPROYECTO DE LEY

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA:

LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ZONAS NO DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Antecedentes

El Perú es un país multicultural de una gran extensión geográfica, dividida en zonas de diversidad étnica, cultural y con variados niveles socioeconómicos, que incluyen áreas de pobreza y extrema pobreza. Esto ha conllevado al Estado a desplegar grandes esfuerzos en la búsqueda de consolidarse como un Estado Nación. Como consecuencia de lo expuesto, a principios de los años ochenta, el surgimiento de ideologías extremistas, propagadas en zonas de extrema pobreza, aunadas a un grado de intolerancia, dio origen a situaciones de violencia cuyo objetivo fue la desestabilización de la sociedad organizada.

Actualmente, el terrorismo tiende a establecer asociaciones ilícitas que atentan contra la integridad, y en muchos casos, la vida de las personas, en zonas del país, especialmente deprimidas.

Ante el contexto sociopolítico expuesto y según lo dispuesto en el artículo 44° de la Constitución Política, uno de los deberes primordiales del Estado, es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Para ello el Estado delega en la Policía Nacional la obligación de defender el Estado de Derecho, y hacer realidad el derecho ciudadano a vivir en paz y tranquilidad.

Asimismo, la conflictividad social ha motivado que en diversas ocasiones se generen niveles de violencia que rebasan en algunos casos la capacidad operativa de la Policía Nacional, lo que hace necesario evaluar la intervención de las Fuerzas Armadas.

En atención a la problemática planteada líneas arriba, se dictó la Ley N° 29166, Ley que establece reglas de Empleo de la Fuerza por parte del personal de Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2008-DE-CCFFAA.

Por su parte, la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario

- CONADIH¹, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia de derecho internacional humanitario, como parte de sus objetivos de contribuir con: i) la implementación, respeto y aplicación del DIH en el Perú **mediante medidas legislativas, administrativas e institucionales**; y ii) la promoción del respeto y aplicación de principios y normas relevantes para la **regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas** en disturbios interiores y otras situaciones de violencia interna que se encuentran por debajo del umbral de aplicación del DIH, procedió con el análisis de los problemas técnico-jurídicos encontrados en la Ley 29166 'Ley que establece reglas de Empleo de la Fuerza por parte del personal de las fuerzas armadas en el territorio nacional' y su Reglamento.

Así, el Sub-grupo de trabajo de la CONADIH destinado al análisis de la citada Ley y su Reglamento expidió el documento de trabajo titulado: *Resumen Ejecutivo de las Consideraciones y recomendaciones técnicas sobre la Ley N° 29166, Ley que establece reglas de Empleo de la Fuerza por parte del personal de las fuerzas armadas en el territorio nacional y su Reglamento*. El documento de análisis evaluó los problemas técnicos-legales relacionados a los ámbitos de aplicación de la Ley y su Reglamento, la terminología empleada, la configuración de las reglas de empleo de la fuerza y los supuestos sobre el uso de la fuerza letal, y concluyó en la necesidad de que se proceda con la revisión y reforma de las normas en cuestión.

Necesidad de la propuesta

El 9 de septiembre de 2009, el Tribunal Constitucional del Perú emitió sentencia respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 29166², y declaró inconstitucional la segunda parte del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley N° 29166, que establece que “*en las situaciones descritas (...) y en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal*”. Así mismo declara inconstitucional la frase “*capacidad del enemigo*” del artículo 10 de la Ley en mención.

Uno de los problemas principales analizados por el Tribunal, consiste en que la Ley carece de técnica legislativa, en la medida que “confunde instituciones propias del Derecho Internacional Humanitario relativo a la conducción de hostilidades en conflictos armados con el uso de la fuerza en situaciones de disturbio o tensiones internas, en la cual es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el marco jurídico aplicable”. (Fundamento N° 60 y N° 61 de la Sentencia). Ante dicha ambigüedad, el Tribunal reincide en la necesidad de que las Fuerzas Armadas deban contar con un marco claro en su actuación y uso de la fuerza, que distinga una situación de conflicto armado, de una en la que sólo se trate de disturbios internos. (Fundamento N° 63 de la Sentencia).

A la luz de las obligaciones internacionales y de acuerdo al Tribunal Constitucional, básicamente son dos consideraciones técnicas que marcan el deslinde de la Ley N° 29166, una es el ámbito de aplicación y la otra, la terminología empleada en la misma. Y es que se debe reconocer que el ámbito de aplicación de la Ley N° 29166 busca atender dos escenarios delimitados por el nivel o escalada de violencia alcanzado, así se tiene i) **situaciones de disturbios interiores y otras situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado**, y ii) **situaciones de conflicto armado de índole no internacional**. Mientras que la primera se encuentra regulada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la segunda por el Derecho Internacional Humanitario. En función de estos dos escenarios, y de los cuerpos normativos que los regulan se tienen dos tipos de terminología diferenciada, una aplicada a

¹ Creada mediante Resolución Suprema N° 234-2001-JUS, de 1 de junio de 2001.

² Sentencia del Tribunal Constitucional al Expediente N° 00002-2008-PI/TC, de 9 de septiembre de 2009.

situaciones de conflicto armado como “operaciones militares”, acciones militares”, “daños incidentales”, “enemigo”, etc.; y otra aplicada a situaciones infra DIH, como pueden ser “acciones militares”, “acción hostil”, “intención hostil”.

En vista que la Ley N°29166 pretendía abarcar los diferentes escenarios de violencia, de una manera no deslindada, conducía en últimas, a que no se delimitará con precisión cuales son los distintos ámbitos de intervención de la Fuerza Armada, ni permitía por ende, distinguir el marco jurídico aplicable en cada contexto.

A fin de superar esta confusión de contextos y de marcos jurídicos, la presente propuesta legislativa tiene por objeto desarrollar los principios y normas aplicables para las situaciones no declaradas en estado de emergencia, las cuales pueden obedecer a disturbios internos u otras situaciones de violencia que en todo caso, no alcanzan el umbral de un conflicto armado de índole no internacional. Para ello, recoge los principios y normas del DIDH sobre la materia, así como los estándares internacionales alcanzados, como son el “Código De Conducta Para Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La Ley de 1979” y los “Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1990”.

En relación con el empleo de la fuerza, en general, podemos señalar que en vista a que la Fuerza Armada tiene una estructura organizacional y capacidad militar para fines de Defensa Nacional, que difieren de la preparación y equipamiento de la Policía Nacional, es necesario establecer un marco jurídico que regule de manera precisa mediante Reglas el empleo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando actúan en protección de las personas, bienes y seguridad nacional, con la finalidad de establecer las instrucciones necesarias para garantizar que las operaciones y acciones militares se enmarquen en las disposiciones legales nacionales e internacionales vigentes.

En tal sentido, el establecimiento de éstas Reglas de empleo de la fuerza deberá tener en cuenta los estándares internacionales alcanzados en la materia. De esta manera, atendiendo a un criterio técnico debemos referirnos al empleo de la fuerza cuando tengamos vocación de atender ámbitos de aplicación tanto de situaciones de conflicto armado como de situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto armado. Mientras que, cuando se haga referencia a ámbitos que no alcancen el umbral de un conflicto armado se utilizará el término “uso de la fuerza”, tal como lo señalan el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979” y los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1990”. Por consiguiente, apartándonos del término empleado en la Ley N° 29166, en lo que respecta no se hará referencia a Reglas de Empleo de la Fuerza (REF), sino a Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para referirnos a las reglas que regulan el uso de la fuerza en situaciones que se encuentren por debajo del umbral regulado por el Derecho Internacional Humanitario.

Particularmente, las RUF propuestas en el proyecto de ley, consolidan las facultades y obligaciones de las fuerzas operativas abocadas al establecimiento de la paz en la sociedad, preservando las vidas humanas, especialmente en lo que se refiere a las víctimas de las situaciones de violencia y el respeto al marco constitucional vigente en el país.

Asimismo, las RUF permitirán que las actividades operacionales de las Fuerzas Armadas se enmarquen en un respeto al Estado de Derecho, regulando la debida aplicación de la Legítima Defensa en casos en que no se haya declarado el Estado de Emergencia, en salvaguarda de los objetivos operacionales y el respeto a los integrantes de la sociedad.

Constitucionalidad de la propuesta

El marco constitucional que orienta a las RUF se fundamenta en considerar a la persona humana como fin supremo de la sociedad y Estado, tanto para su protección y seguridad como cuando el Estado a través del personal militar asume la obligación de hacer uso de la fuerza con naturaleza de por sí limitada.

De acuerdo a lo anterior, la seguridad de la persona es un aspecto básico, y para brindarlo, la Constitución en el Título IV sobre Estructura del Estado, considera el Capítulo XII De La Seguridad y de la Defensa Nacional, cuyo artículo 163° señala que el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

Siguiendo las consideraciones del Tribunal Constitucional señaladas en su Sentencia respecto del Expediente N° 00002-2008-PI/TC³, la presente propuesta legislativa pretende superar las imprecisiones que adolece la Ley N° 29166, en el sentido que determina bajo qué situaciones las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo de la Policía Nacional en Zonas No Declaradas en Estado de Emergencia. Las situaciones que ameritarían tal intervención, de acuerdo al artículo 8° y 44° de la Constitución, serían única y exclusivamente las siguientes:

1. Narcotráfico
2. Terrorismo
3. La protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas.

En consideración a la excepcionalidad de esta intervención, en razón a los artículos 45° y 166° de la Carta Magna, ésta sólo procederá cuando se haya sobrepasado la capacidad operativa de la policía, entendiendo por tal, cuando sus miembros hubieran agotado los medios pacíficos y el uso de la fuerza, en sus diversos niveles preventivo y reactivo, y el resultado legal esperado no fuese alcanzado.

En virtud a lo expuesto en los párrafos precedentes, la interacción entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en favor de la seguridad, orden y Defensa Nacional establece un contexto de mutua cooperación y comunicación constante, que ante eventuales situaciones de violencia se incrementa y consolida a favor del bienestar de la comunidad y respeto del ordenamiento jurídico vigente.

Si bien el control del orden interno es una función principal de la Policía Nacional, los antecedentes históricos y la realidad nacional nos muestran que hay situaciones de violencia, ante las cuales la capacidad de la Policía Nacional es superada por hechos violentos, siendo necesario el apoyo de la Fuerza Armada, para restablecer el orden interno.

³ Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, respecto del Expediente N° 00002-2008-PI/TC, expedida el 9 de setiembre de 2009, sobre proceso de inconstitucionalidad interpuesto por 31 Congresistas.

La aprobación del presente Proyecto de Ley constituirá un medio eficaz para que el Estado regule el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, en el restablecimiento del orden interno, otorgando a sus miembros un marco legal inequívoco que brinde seguridad jurídica a su accionar, en Zonas No Declaradas en Estado de Emergencia, en las situaciones previstas en el texto de la presente Ley, con observancia estricta del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por consiguiente, se les estaría brindando a las Fuerzas Armadas, el paraguas jurídico necesario para hacer frente adecuadamente a las situaciones de alteración del orden interno, sin incurrir en excesos en el Uso de la Fuerza, evitando con ello, la atribución de responsabilidades penales.

Finalmente, respecto de la necesidad de la propuesta legislativa y su engranaje dentro del ordenamiento jurídico nacional podemos señalar que esta propuesta legislativa responde a las propias exhortaciones del Tribunal Constitucional respecto de la necesidad de una legislación que desarrolle los siguientes elementos para la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones no contempladas bajo el estado de emergencia: "(i) quién es la autoridad competente para decidir cuándo se ha sobrepasado la capacidad operativa de la Policía y es necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas; (ii) cuáles son las situaciones en las que se puede llamar a las Fuerzas Armadas a actuar en zonas no declaradas bajo estado de emergencia. (iii) cuál es el plazo, tanto mínimo como máximo, durante el cual las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional; (iv) cuáles son los mecanismos de control político y jurisdiccionales aplicables a estas situaciones, y (v) si estas medidas implican o no una restricción en el ejercicio de determinados derechos constitucionales" (Fundamento 39 y 52 de la Sentencia del Tribunal, Expediente N° 00002-2008)

3. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

La aprobación del presente Proyecto de Ley irrogará al Estado peruano los gastos que genere la compra de equipamiento adecuado de uso policial para su utilización por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como la instrucción necesaria que los miembros de las Fuerzas Armadas que intervengan en las situaciones planteadas tengan que adquirir para conducirse de acuerdo a lo dispuesto.

Mientras que, entre los principales beneficios que se esperan de este Anteproyecto de Ley se tiene: i) el establecimiento de una base normativa sólida que permita favorecer el desarrollo constitucionalidad del uso de la fuerza con el ordenamiento interno y con los instrumentos internacionales relacionados al Derecho Internacional de los Derechos humanos; y ii) la mejora en la protección de la actuación de las Fuerzas Armadas en escenarios que se encuentran por debajo del umbral de un conflicto armado, entre otros.

4. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

Actualmente, no existe una norma que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en Zonas No Declaradas en Estado de Emergencia.

En tal sentido, la presente norma plantea una innovación en el ordenamiento jurídico peruano que suple vacíos normativo, y desarrolla normas constitucionales.

5. FÓRMULA NORMATIVA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Ha dado la siguiente Ley:

**LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE
LAS FUERZAS ARMADAS EN ZONAS NO DECLARADAS EN ESTADO DE
EMERGENCIA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL**

**TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
DEL OBJETO, DEFINICIÓN DE TÉRMINOS,
ALCANCE Y VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación

Establecer el marco legal que permita regular el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional del Perú en el restablecimiento del orden interno, en Zonas No Declaradas en Estado de Emergencia, para los siguientes casos:

1. Narcotráfico, conforme a leyes que regulan el delito de tráfico ilícito de drogas.
2. Terrorismo, conforme a leyes que regulan el delito de terrorismo.
3. La protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas.

Artículo 2°.- Definición de Términos

Para todos los efectos, en la presente Ley se entiende por:

1. EMPLEO DE LA FUERZA

Es el despliegue de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.

2. USO DE LA FUERZA

Es el despliegue de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, con relación a situaciones de disturbios internos y otras situaciones de violencia interna, y orientadas a mantener y/o restablecer el orden interno.

3. TERRORISMO/DELITO DE TERRORISMO

El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado.(En concordancia con el artículo 2° del Decreto Ley N° 25475.)

Esta conducta exige necesariamente la concurrencia de los tres elementos objetivos o modalidades del tipo penal, los cuales deben concurrir necesariamente para la configuración del delito de terrorismo. La falta de uno de ellos, hace imposible la tipificación. Además, ésta conducta exige la concurrencia de la intencionalidad del agente, siendo ésta en un sentido interpretativo la siguiente: “*El que (intencionalmente) provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella (...)*”. (Véase Fundamento 65 de la Sentencia al Expediente N° 010-2002-AI/TC).

Para una interpretación autorizada de cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo véase los fundamentos 60 al 78 de la Sentencia del Tribunal Constitucional al Expediente N° 010-2002-AI/TC del 4 de enero de 2003, sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por Marcelino Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos.

4. NARCOTRÁFICO/TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Véanse las conductas a las que se refiere la presente Ley, en la sección II (Tráfico Ilícito de Drogas) del Capítulo III (Delitos contra la Salud Pública) del Título XII (Delitos contra la Seguridad Pública) del Código Penal Peruano.

5. INSTALACIONES ESTRATÉGICAS

Entiéndase por aquellas que son vitales para el funcionamiento del país, tales como: puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas. Véase la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en relación con el Expediente N° 00002-2008-PI/TC.

6. MEDIOS LETALES

Nivel máximo de la fuerza empleada por el cual resulta probable causar la muerte.

7. REGLAS DE USO DE LA FUERZA (RUF)

Las RUF son disposiciones específicas que regulan el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando intervienen en el contexto de disturbios internos y otras situaciones de violencia interna. Las RUF estarán ajustadas al "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979" y los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1990", así como a otros instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relacionados.

Artículo 3°.- Alcance

La presente Ley es aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en apoyo a la Policía Nacional del Perú, en las circunstancias señaladas en el Artículo 1° de la presente Ley.

Artículo 4°.- Vigencia de los derechos humanos

En los casos previstos del Artículo 1°, no se restringe ni se suspende la vigencia de los derechos humanos.

TÍTULO I DE LA INTERVENCIÓN

CAPÍTULO I DE LA INTERVENCIÓN Y PLAZOS

Artículo 5°.- Intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas

- 5.1 La intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas, en zonas no declaradas en estado de emergencia en los casos comprendidos en el Artículo 1°, sólo podrá realizarse cuando se sobrepase la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú.
- 5.2 Entiéndase sobrepasada la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, cuando sus miembros hubieran agotado los medios pacíficos y el uso de la fuerza, en sus diversos niveles preventivo y reactivo, y el resultado legal esperado no fuese alcanzado.

Artículo 6°.- Plazo máximo de la intervención

La intervención en Zonas No Declaradas en Estado de Emergencia, no podrá ser superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la autorización de la intervención.

CAPÍTULO II DE LA SOLICITUD, APROBACIÓN, CONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 7°.- De la solicitud y aprobación de la intervención

- 7.1 La Autoridad Política o Policial del lugar en que se produzcan los supuestos señalados en el Artículo 1° de la presente Ley deberá, en el día, solicitar la intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas al Ministro del Interior, quien una vez evaluados los hechos, trasladará inmediatamente el pedido al Ministerio de Defensa, a efectos de su determinación.
- 7.2 El Presidente de la República autorizará la intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante Resolución Suprema, refrendada por los Ministros de Defensa y del Interior.

Artículo 8°.- Excepción al procedimiento

En caso que las características geográficas de la zona impidan cumplir el procedimiento previsto en el artículo 7°, la Autoridad Política o Policial, con conocimiento del Ministerio del Interior, podrá solicitar directamente al Comando Militar de esa zona su intervención, con cargo a emitirse la Resolución Suprema correspondiente.

Artículo 9°.- Del conocimiento de la solicitud

La Autoridad Política o Policial deberá poner en conocimiento del Alcalde de la localidad y del Presidente de la Región en que se produzcan los supuestos de hecho, la solicitud de intervención.

Artículo 10°.- Del control de la intervención

La Policía Nacional del Perú seguirá ejerciendo el control del orden interno, con el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas, debiendo coordinar las acciones de intervención de manera conjunta.

TÍTULO II DEL USO DE LA FUERZA

CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 11°.- Principios.

Los principios rectores para el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la presente Ley, son los siguientes:

1. **Legalidad.** Todo acto de uso de fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas deberá estar amparado en la presente ley y su Reglamento, así como en los estándares internacionales señalados en el artículo 12°.
2. **Necesidad.** El análisis de la necesidad en cuanto al uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas implica dos verificaciones: de un lado, haber agotado el despliegue de medidas que no necesariamente implicaren el uso de la fuerza y que, no obstante, pudiesen alcanzar el resultado esperado, y por el otro, luego de esta verificación, llegar a la conclusión de que un eventual uso de la fuerza resulta inevitable para alcanzar dicho resultado.
3. **Proporcionalidad.** Es la equivalencia o correspondencia entre la gravedad de la amenaza y el grado de fuerza empleada, debiendo ser ésta la mínima necesaria en relación a dicha amenaza y en función al resultado legal esperado.

CAPÍTULO II DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE

Artículo 12°.- Carácter vinculante.

Los miembros de las Fuerzas Armadas que emplearan la fuerza en las situaciones previstas en el artículo 1° se encuentran sujetos a lo dispuesto en la presente Ley, en concordancia con el "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979" y los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1990", así como con otros instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relacionados.

CAPÍTULO III DE LOS NIVELES DE INTENSIDAD EN EL USO DE LA FUERZA

Artículo 13°.- Niveles.

Los niveles en el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en los casos previstos en el artículo 1°, en cumplimiento de la presente Ley, serán los siguientes:

1. Preventivo

- a) **Presencia Militar.** Entendida como demostración de autoridad, en la que los miembros de las Fuerzas Armadas están correctamente uniformados, equipados, en actitud diligente y de alerta, actuando disuasiva y preventivamente con miras a restablecer el orden interno.
- b) **Contacto Visual.** Es el dominio visual sobre una persona, grupo de personas, vehículos, áreas y/o instalaciones, que permite ejercer un cierto control sobre la situación.
- c) **Verbalización.** Es el uso de la comunicación oral, utilizando el tono y los términos necesarios que sean fácilmente comprendidos, con miras a restablecer el orden interno.

2. **Reactivo.** Una vez agotadas las acciones del nivel preventivo, y antes de emplear la fuerza en el nivel reactivo, se realizará la advertencia correspondiente, siempre y cuando la situación lo

permita. En cualquier caso, se podrá proceder gradualmente al uso de la fuerza de la siguiente manera:

- a) **Control Físico.** Es la acción militar que utiliza técnicas de fuerza corporal, con el fin de controlar, reducir, inmovilizar y/o conducir ante la autoridad que corresponda a quienes se encuentren alterando el orden interno.
- b) **Medios no letales.** Se refiere al uso táctico de equipamiento y/o armas no letales, que representen un bajo potencial ofensivo, para contrarrestar y/o superar la amenaza existente.
- c) **Medios letales.** Sólo se podrá proceder al uso de armas de fuego de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14° de la presente Ley.

CAPÍTULO IV DEL USO DE ARMAS DE FUEGO

Artículo 14°.- Uso excepcional.

- 14.1 Los miembros de las Fuerzas Armadas no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todos los casos, sólo se podrá hacer uso intencional de armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
- 14.2 Si como consecuencia del uso de armas de fuego se produjesen heridos, los miembros de las Fuerzas Armadas habilitarán la atención médica inmediata a los mismos, sin discriminación. En caso se registrasen personas fallecidas se adoptarán los protocolos correspondientes para el tratamiento de los restos humanos. En ambos casos se procederá a informar a los familiares.

Artículo 15°.- Informes sobre el Uso de Armas de Fuego

- 15.1 Los miembros de las Fuerzas Armadas que hagan uso de armas de fuego presentarán inmediatamente un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes aspectos: fecha, hora y lugar del incidente, unidad o elemento que participó en el incidente, hechos que condujeron a su participación, la causa por la cual se abrió fuego, el tipo y la cantidad de armas y municiones empleadas, daños personales y/o materiales causados, número de eventuales detenidos, heridos y/o muertos, debiendo acompañar en lo posible registros fílmicos o fotográficos existentes.
- 15.2 Si como consecuencia del uso de las armas de fuego se produjeran los daños arriba mencionados, el superior o la autoridad competente procederán a la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades del caso.

CAPÍTULO V DE LA INSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Artículo 16°.- Instrucción

Los miembros de las Fuerzas Armadas que intervengan en estas situaciones deberán recibir la instrucción, preparación y entrenamiento propios de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Artículo 17°.- Equipamiento

Los miembros de las Fuerzas Armadas deberán, a su vez, ser dotados del equipamiento adecuado, así como de los distintos tipos de armas y municiones no letales para este tipo de situaciones, de modo tal que puedan hacer un uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Además, deberán ser dotados de un equipo protector a fin de salvaguardar su propia seguridad.

**TÍTULO III
DE LA RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIA****CAPÍTULO I
DE LA RESPONSABILIDAD****Artículo 18°.- Responsabilidad**

18.1 Los miembros de las Fuerzas Armadas que usen la fuerza en contradicción con la presente Ley y su Reglamento, así como los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, serán investigados y sancionados, según corresponda.

18.2 Todo miembro de las Fuerzas Armadas que tuviere conocimiento de estos hechos se encuentra obligado a denunciar los mismos ante el superior y/o ante la autoridad competente, quienes se encontrarán, a su vez, obligados a abrir investigación.

Artículo 19°.- Obediencia debida

Los miembros de las Fuerzas Armadas no podrán alegar obediencia debida para exonerarse de las responsabilidades respectivas, cuando la orden haya sido manifiestamente ilícita. Los superiores que dieron la orden ilícita también serán responsables.

Artículo 20°.- Responsabilidad del superior

El superior asumirá la responsabilidad correspondiente cuando tenga conocimiento, o debiera haberlo tenido, de que sus subordinados hayan infringido las disposiciones de la presente ley y su Reglamento, y no adoptase todas las medidas preventivas y/o correctivas a su disposición.

Artículo 21°.- Exención de responsabilidad penal

Los supuestos de exención de responsabilidad penal derivados de la aplicación de la presente Ley serán regulados conforme a lo establecido en los numerales 3 y 8 del Artículo 20° del Código Penal y en la Ley N° 27936, en materia de legítima defensa y cumplimiento del deber.

**CAPÍTULO II
COMPETENCIA****Artículo 22°.- Competencia**

Los miembros de las Fuerzas Armadas que cometiesen delitos de función en aplicación de la presente Ley serán sancionados por el fuero militar policial.

**TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS****CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

PRIMERA.- Aplicación supletoria de la Ley que regula el empleo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerza Armadas en Zonas Declaradas en Estado de Emergencia dentro del Territorio Nacional

En caso el escenario de la intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas, en aplicación del artículo 1° de la presente Ley, superara una situación de violencia interna, y alcanzara el umbral de un conflicto armado de índole no internacional, corresponderá decretarse el Estado de Emergencia, a efectos de la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley que regula el empleo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en Zonas Declaradas en Estado de Emergencia dentro del Territorio Nacional

SEGUNDA.- Vigencia y Reglamento

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Defensa, reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de su puesta en vigencia.

**CAPÍTULO II
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA**

ÚNICA.- Derogación

Deróguense todas las normas que se oponen a la presente Ley.



Comisión Nacional de Estudio y Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario